



Dirección General de Infancia,  
Familias y Natalidad  
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES,  
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD

## INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “ASISTENCIA Y DEFENSA JURÍDICA A MENORES TUTELADOS POR LA COMISION DE TUTELA DEL MENOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL ÁMBITO PENAL ESPECIFICO DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000 DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR (LORPM)”

De acuerdo con el artículo 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), al considerarse este contrato como de servicios, se procede a justificar el recurso a la gestión indirecta para su prestación.

De acuerdo con lo expuesto en la memoria justificativa de la necesidad del contrato así como en la propia descripción de las actuaciones e intervención a desarrollar, las prestaciones propias del presente contrato se consideran de carácter ordinario de la Administración competente en materia de infancia, pero que deben ser prestadas por personal cualificado y con experiencia constatada para tal fin y que de cobertura a las necesidades de estos menores durante su comparecencia ante el fiscal o la autoridad judicial.

El artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, previene la posibilidad de que las personas menores de edad puedan solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección y defensa de sus derechos e intereses, ello sin perjuicio de las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal para actuar en defensa de los derechos de los menores.

En tal sentido, el artículo 2 de la Ley 1/1996 establece que las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se habrán de interpretar de forma restrictiva y, en todo caso, siempre atendiendo a su interés superior. A los efectos de interpretar y aplicar en cada caso del interés superior del menor, se habrá de tener en cuenta como elemento general -entre otros- la consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

El artículo 74 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, establece que *“La Comisión de Tutela del Menor **facilitará asistencia y defensa** letrada a todos los menores tutelados por la Comunidad de Madrid que se encuentren detenidos o a disposición judicial”*, por lo que la licitación de este contrato viene a dar cumplimiento a esta obligación legal.

Con ocasión de una licitación anterior con el mismo objeto, se evacuó el día 1 de julio de 2008 un primer informe por los servicios Jurídicos en la entonces Consejería de Familia y Asuntos Sociales, en el que se concluía que este contrato no suponía una externalización de funciones propias de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid porque la defensa de menores tutelados no formaba de la actividad del Cuerpo y que su eventual exención implicaría entrar en conflicto de intereses con las actividades que tienen que ejercer legalmente.



El informe **SJ307/2014** de fecha 27 de junio de 2014, evacuado por la Letrada Jefe de los Servicios Jurídicos de la entonces Consejería de Asuntos Sociales vino a establecer la misma conclusión y estableció que *“corresponde a la Comisión de Tutela del Menor designar abogado cuando éste se encuentre detenido o a disposición judicial, y supondría una dejación de las funciones que le son propias dar lugar a que esa designación se efectuase de oficio”*.

Señala asimismo el informe que *“La dicción literal de los arts. 1 y 2 de la Ley 3/1999 de 30 de marzo de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, no deja lugar a dudas, aparte del asesoramiento y defensa de la Comunidad de Madrid, entendida en su más amplio sentido, las únicas personas físicas respecto de las cuales, el legislador ha previsto su representación y defensa en juicio por los Letrados de la Comunidad de Madrid **son sus autoridades, funcionarios y empleados**, condición que en ningún caso concurre en los menores tutelados”*.

Por tanto, mientras se mantenga el criterio defendido por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, la **asistencia y defensa letrada de los menores** tutelados se debe realizar por un abogado independiente en ejercicio, no contando la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad con personal adecuado para ello, por lo que se debe recurrir a la contratación de un profesional o un despacho de abogados externo.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA,  
FAMILIAS Y NATALIDAD

Fdo.: Ana Sastre Campo

